

Sin luz al final del túnel

Jóvenes ante la quiebra del pacto intergeneracional en la Gran Recesión

Pau Marí-Klose

Resumen: La Gran Recesión en España trajo consigo nuevas formas de hacerse adulto. Aunque la precariedad laboral y las dificultades para emanciparse no son nuevas, por primera vez las cohortes jóvenes iban a confrontar un futuro poco alentador. A medida que la crisis se profundizaba, se extendía la sensación de que las desventajas que también habían experimentado cohortes anteriores no eran esta vez un estado transitorio en el que los individuos iban a soportar las adversidades bajo la expectativa de que, más pronto que tarde, iban a alcanzar un puerto seguro, donde disfrutarían de los privilegios característicos de la vida adulta. En este artículo examino los procesos sociales y políticos que conducen a estos sentimientos de vulnerabilidad subjetiva durante la Gran Recesión, así como las diferentes reacciones a estos nuevos horizontes. En la última sección, la atención se concentra en las estrategias políticas de los dos principales partidos en el panorama español, PSOE y PP, para acomodar las nuevas demandas e incertidumbres de los jóvenes.

Palabras clave: precariedad, crisis económica; juventud; pacto intergeneracional

Abstract: The Great Recession in Spain has created new paths leading toward adulthood. While labour precariousness and difficulties leaving the parental home are not new, this was the first time that younger generations faced bleak long-term prospects. As the crisis deepened, it became increasingly evident that the disadvantages experienced by former generations, this time would not be temporary, with any hope that individuals could endure a period of hardship before reaching, sooner rather than later, the safe harbour where they would eventually enjoy the privileges of adulthood. In this article, I examine the social and political processes that produced sentiments of subjective vulnerability during the Great Recession and different reactions to the new prospects. The last section focuses on the political strategies employed by of the two main political parties in the Spanish landscape, PSOE and PP, to accommodate the new demands and uncertainties faced by young people.

Key Words: precariousness; economic crisis; youth; intergenerational pact

Introducción

Decía George Bernard Shaw que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. En este sentido le ocurre algo parecido a muchas otras afecciones que se sobrellevan porque se anticipa que hay luz al final del túnel, en este caso el que nos conduce a la vida adulta. Shaw juega hábilmente con la idea contraintuitiva de que la juventud –la etapa en que los seres humanos alcanzan su plenitud física– pueda asociarse a un estado de mala salud. Una enfermedad se sufre. A veces se sufre de manera callada, otras sin esconder la incomodidad y dolor causados por ella. Gracias a la medicina, es posible vivirla de forma anestesiada y/o acelerar la curación. Pero cuando la medicina es ineficaz, la enfermedad se puede complicar, y aunque llegue la curación, es muy posible que queden secuelas.

La crisis y las políticas de austeridad han traído nuevas formas de hacerse adulto en España y, con ello, de vivir la “enfermedad” de la juventud. Los jóvenes españoles habían sufrido tradicionalmente distintas situaciones de privación y desventaja respecto a grupos de edad más avanzada. Su riesgo de desempleo ha sido tradicionalmente alto, sus salarios generalmente bajos, sus contratos precarios, y muchos de ellos solo conseguían empleo en situación de subocupación, desarrollando tareas para las que estaban sobrecualificados. Es una situación descrita profusamente por la sociología en España desde hace más de tres décadas. Una situación con carácter transitorio, que se curaba con el tiempo. Los españoles iniciaban el periplo juvenil con cierta certeza de que había luz al final del túnel. Durante muchos años se sentirían minusvalorados y sufrirían explotación, no podrían iniciar proyectos emancipatorios, emprender o formar una familia. Pero podían confiar en el futuro. Eran testigos directos de que la generación que les precedía había culminado el proceso, y el resultado final era habitualmente satisfactorio. Terminaron emancipándose, asegurándose unas condiciones laborales razonablemente buenas y desarrollando su proyecto familiar con arreglo a aspiraciones que, entrada la vida adulta, resultaban aceptables, aunque supusieran renunciar a algunas de las preferencias que mostraban en los primeros años de juventud. Un ajuste de los deseos a las posibilidades

reales, que se vivía sin demasiada frustración. La Gran Recesión que se inicia en 2008 hace saltar todas las costuras de este arreglo, porque durante un tiempo de una duración sin precedentes cercanos, no se ve luz al final del túnel.

Pacto intergeneracional

España ha sido caracterizado a menudo como un país familista. Junto a otras sociedades mediterráneas formaría parte de un bloque aparentemente compacto de países en que los problemas individuales de los/as integrantes de la red familiar (como desempleo, falta de recursos económicos o de vivienda, enfermedad) tienden a ser definidos como “asuntos familiares”. Como tales reclaman la movilización de los recursos colectivos disponibles, tanto simbólicos como económicos y organizativos. La expresión más emblemática de la solidaridad familiar es el compromiso de los padres con el bienestar de sus hijos. Viajeros y antropólogos primero, así como las encuestas con universos “multinacionales” en las últimas décadas, ponen de manifiesto la vocación de los padres y, sobre todo, de las madres en el Sur de Europa por proteger a sus hijos. Históricamente, los hijos han tendido a emanciparse a edades más tardías, generalmente para formar su propia familia.

Las bases organizativas, morales y actitudinales del familismo en el ámbito privado se corresponden con estructuras de segmentación y subordinación de los jóvenes en el ámbito público. Los jóvenes deben esperar su turno. Los jóvenes experimentan considerables desventajas tanto en el mercado de trabajo como en el sistema público de bienestar, que resultan justificables por el hecho de tratarse de situaciones transitorias y que pueden sobrellevarse cómodamente coresidiendo con los padres en el hogar familiar. En el mercado de trabajo, los jóvenes en transición a la vida adulta han ocupado los empleos menos deseables. En sociedades como la española los jóvenes se han visto abocados tradicionalmente a los empleos más precarios, de carácter temporal, bajo peores condiciones y peor remunerados.

El hecho de que estas contrataciones precarias hayan sido utilizadas por los empleadores para adecuar la producción a una demanda volátil,

en que las necesidades de empleo varían coyunturalmente, ha convertido las primeras etapas del itinerario laboral de muchos jóvenes en trayectorias discontinuas. En esas etapas iniciales van encadenando empleos de corta duración, salpicados por períodos más o menos largos de desempleo (Moreno / Marí-Klose 2013). Esta precariedad laboral tiene consecuencias importantes, descritas profusamente en la literatura especializada, especialmente cuando se alarga y se traduce en una precariedad vital, y los individuos encuentran dificultades crecientes para superarla. Además, aboca a situaciones de explotación. En un país con elevadas tasas de paro estructural, como las que existen en España, los empresarios pueden utilizar la posibilidad de otorgar un contrato indefinido, con buenas condiciones, como “zanahoria” que incentiva a los trabajadores precarios a aceptar malas condiciones de empleo con la perspectiva de que su acomodación a esas circunstancias se traduzca en su incorporación al estrato de trabajadores “privilegiados” que sí disfrutaban de buenos contratos (Polavieja 2005).

Una segunda expresión de desventaja de los jóvenes en sociedades mediterráneas como la española deriva de su acceso a la protección social. Buena parte de esa protección tiene un carácter contributivo y, por tanto, está reservada a trabajadores con itinerarios relativamente largos y estables en el mercado de trabajo. El ejemplo más obvio son las prestaciones de desempleo, de las que la mayor parte de los jóvenes desempleados queda excluida, ya sea porque no cumplen los requisitos de tiempo de cotización necesarios para empezar a cobrar la prestación, ya sea porque agotan rápidamente las prestaciones a las que tienen derecho al repetirse con asiduidad la situación de desempleo.

Las desventajas que experimentan los jóvenes se inscriben en un marco de relaciones institucionalizado, “normalizado” y aceptado sin excesiva contestación. Es asumido como el estado natural de las cosas en una sociedad donde los adultos, que suelen disfrutar condiciones más favorables, recuerdan a los jóvenes que se muestran más inquietos una frase tópica: “todos hemos pasado por la misma situación”. La frase encierra una gran promesa intertemporal, condensada en otra frase: “cuando seas padre, comerás huevos”.

Una promesa de estas características puede convertirse en fundamento de un contrato intergeneracional en la medida en que los jóvenes pue-

den confiar en que el proceso tiene un carácter cíclico. Los jóvenes de hoy podrían estar seguros de que se convertirán en adultos que disfrutaran ventajas similares a las que disfrutaban los adultos de hoy en el mercado de trabajo y el sistema de protección social. Si pueden conservar esta confianza, también podrán mantener la expectativa de cumplir las previsiones normativas que la sociedad alberga respecto a los procesos de emancipación. La emancipación se pospone, pero no se imposibilita, porque llega un momento (habitualmente entrada la treintena) en que los jóvenes acceden a un empleo estable y, con ello, a condiciones de vida que permiten la salida del hogar parental y la formación de nuevas familias.

Mientras esto no ocurre, el *ethos* familiarista propicia que la espera se haga llevadera. Las ayudas de padres a hijos aseguran, como mínimo, el hospedaje y la manutención a jóvenes sin recursos propios. Pero muchas veces se extienden en forma de “solidaridad de promoción”, inversiones educativas con que las familias aspiran, desde edades muy tempranas, a situar a los jóvenes en buena posición para reproducir o mejorar su estatus de origen. Las ayudas pueden prolongarse hasta edades avanzadas, especialmente en familias acomodadas. Jóvenes adultos siguen recibiendo apoyo económico para coronar sus carreras académicas con costosas titulaciones de postgrado que les permitan situarse en buena posición para superar la situación de desventaja estructural que aqueja a la población juvenil (Iglesias de Ussel / Mari-Klose 2016).

En términos generales, este arreglo intergeneracional había funcionado sin excesivos sobresaltos, desactivando reivindicaciones a favor de un trato más equilibrado entre jóvenes y grupos de edad más avanzada. Pero no ha estado exento de incertidumbres y tensiones. Ya en los años 80, la introducción de medidas de desregulación del mercado de trabajo que precarizaban las condiciones de empleo de los nuevos trabajadores, mayoritariamente jóvenes, suscitó el descontento de amplios sectores de la juventud. En 1988, un Plan de Empleo Juvenil del Gobierno provocó la reacción virulenta de los movimientos juveniles, que junto a los sindicatos mayoritarios organizaron una exitosa huelga general que paralizó las intenciones del Gobierno.

De nuevo, en los primeros años del siglo XXI, muchos jóvenes y jóvenes adultos expresaron inquietud acerca de la precarización vital en que se veían sumidos. Son años de fuerte expansión económica y, aunque

menos que otros segmentos de la población, los jóvenes recibieron su parte del pastel. Entre las clases medias se incrementa notablemente el acceso a la educación superior. Entre las clases subalternas aumenta el empleo, lo que propicia márgenes de (pequeño) consumo inéditos. Sin embargo, el horizonte nunca llegó a estar despejado del todo. Generaba inquietud la depreciación del valor de muchos títulos universitarios en un tejido productivo que estaba experimentando rápidas transformaciones propiciadas por la globalización. No generaban menos inquietud las altas tasas de subocupación en el mercado de trabajo. Muchos jóvenes se veían abocados a aceptar empleos a los que se asociaban responsabilidades y tareas que no se correspondían con el nivel de las competencias adquiridas en el sistema educativo.

Sin embargo, por encima de todo, los jóvenes estaban preocupados por el acceso a la vivienda. En un contexto de fuerte encarecimiento de la vivienda, hacerse adulto en términos convencionales, normativamente previstos, parecía una quimera. Con los precios situados en máximos históricos, y a pesar del buen comportamiento del mercado laboral, era impensable que los jóvenes pudieran acumular recursos suficientes para adquirir una vivienda, tal como habían hecho sus padres, con sacrificios, pero sin excesivas demoras. Esa desazón se expresa muy bien en un eslogan del movimiento *V de Vivienda*, que lideraba protestas y movilizaciones por aquel entonces: “No tendrás casa en tu puta vida”.

Lo cierto es, sin embargo, que los jóvenes sí conseguían vivienda. Lo hacían gracias al crédito hipotecario que ayudó generosamente a los segmentos de la población que se proponían hacerse adultos. Hipotecarse comprometió, ciertamente, el futuro de bastantes jóvenes y jóvenes adultos, pero a grandes rasgos puede afirmarse que la mayoría de los que mostraron desasosiego sobre su transición a la vida adulta quedó desmentida por el devenir de los acontecimientos. Durante la etapa de expansión, las tasas de emancipación se incrementaron y el volumen de propietarios aumentó, a pesar de que un segmento cada vez mayor de la población arrastró consigo fuertes cargas hipotecarias, que quizás tengan que sobrellevar hasta edades muy avanzadas. De repente, durante unos años, España dejó de situarse en la franja de países europeos (mayoritariamente mediterráneos) con edades de emancipación más tardías. La llegada de la crisis en 2008 pronto nos devolvería a nuestro lugar.

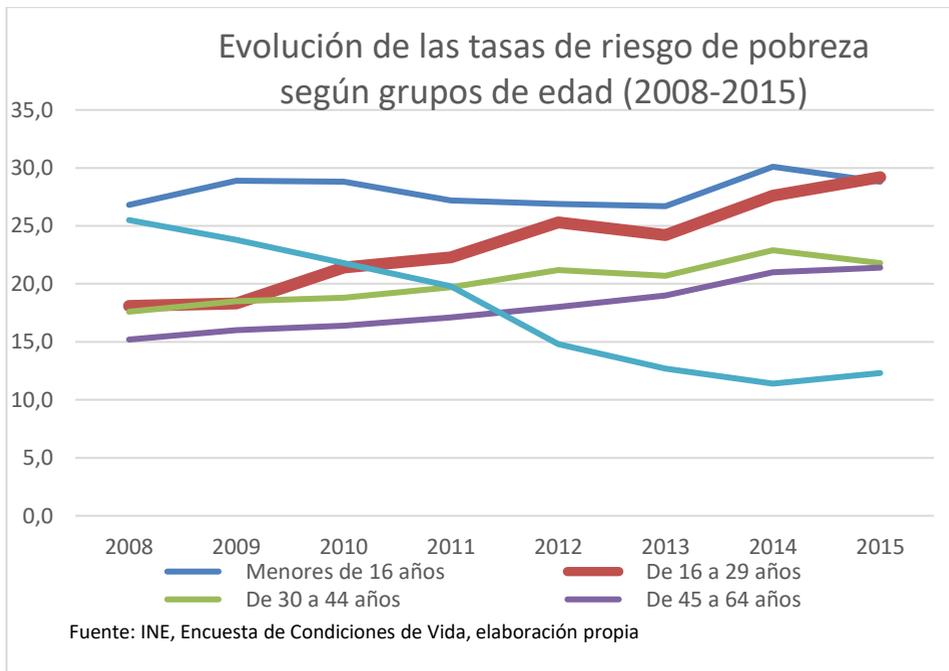
La quiebra del pacto intergeneracional en la crisis

Los verdaderos problemas para el pacto intergeneracional llegaron en el fragor de la crisis. Entre los jóvenes se generalizó la sensación de que sus expectativas no se iban a cumplir. Como había sucedido en otras ocasiones y es previsible en un mercado de trabajo fuertemente segmentado, la destrucción de empleo se concentró entre las personas más jóvenes. En un contexto de fuerte contracción de la demanda, obligadas a reducir costes, las empresas utilizaron a los trabajadores temporales (mayoritariamente jóvenes) como válvula de escape. Es el conocido fenómeno de *last hired/first fired*. Ante la tesitura de desprenderse de parte de su masa salarial, los empleadores se decantan (racionalmente) por despedir en primer lugar a los trabajadores que acarrear indemnizaciones más bajas o simplemente por no renovar sus contratos (Polavieja 2005). La corta duración de los contratos de la mayoría de trabajadores jóvenes los convirtieron en principales candidatos a perder su empleo.

En los primeros años de crisis, la desocupación juvenil se incrementó rápidamente a niveles sin precedentes. Según datos de la Encuesta de Población Activa, entre 2008 y 2012 el porcentaje de personas activas desempleadas de 20 a 29 años paso del 14,3 al 37,1% (Observatorio Social de la Caixa 2019). Los datos de la Encuesta de Estructura Salarial también evidencian que los jóvenes fueron grandes damnificados desde el punto de vista salarial. Entre 2008 y 2013, el salario nominal de un joven trabajador de 20 a 24 años cayó un 19,7%, y el de uno de 25 a 29 años, 10,6%. El nivel salarial del conjunto de la población en ese período se incrementó (nominalmente) un 3,7%, gracias a que en todos los segmentos mayores de 35 años vieron incrementarse ligeramente sus salarios medios durante ese período. Como ha señalado Fernández Kranz (2017), los salarios se ajustaron a la baja entre las personas que optaban a nuevos empleos (*movers*) y se mantuvieron o incluso subieron entre los que mantenían empleo (*stayers*) durante el período. Y entre los *movers*, predominaban los jóvenes.

Como no podía ser de otra manera, con este panorama se incrementó notablemente la pobreza juvenil, y con ello el desaliento y la frustración. De repente, ya no estábamos ante jóvenes llamados a esperar paciente-

mente a que les llegase su turno de ocupar las posiciones sociolaborales más atractivas, reservadas en un mercado laboral dualizado a personas con mayor experiencia, o a comprar su vivienda a crédito. En el escenario inaugurado por la crisis, estábamos hablando de jóvenes adultos que veían frustradas sus expectativas de llevar su vida por los cauces normativos previstos y que, en este caso, tenían razones más que fundadas para vivir con incertidumbre extraordinaria su futuro laboral y vital. Junto a ellos, también vivían esa incertidumbre muchos progenitores, que se sentían impotentes para ayudar a sus hijos a procurarse posiciones de estatus socio-económico equiparables a las suyas.



Por si esto fuera poco, los jóvenes fueron uno de los colectivos más afectados por los recortes. La crisis puso fin a ayudas sociales cuyos beneficiarios eran jóvenes o jóvenes adultos. Uno de los recortes más sangran-

tes fue la Renta Básica de Emancipación¹, que había ayudado a salir de casa de sus padres a decenas de miles de jóvenes. Entre 2009 y 2017 la población joven emancipada pasa del 12,2% al 8%. La de 25 a 29 años del 44,2% al 38, 7%. Se trata de cifras muy bajas en comparación con las medias europeas (30% para jóvenes entre 20 y 24, y 59% entre los que tienen de 25 a 29 años) (López Navas 2019).

Otros recortes se cebaron con las familias jóvenes con niños, como las prestaciones económicas por nacimiento o adopción (popularmente conocidas como cheque bebé)². En distintas CCAA se recortaron ayudas por hijos pequeños, desarrolladas poco antes del estallido de la crisis³. En 2012 también se cancelaron las inversiones en el programa Educa-3, a través del cual el Estado central se había comprometido en la construcción de escuelas infantiles para extender la escolarización de los 0-3 años.

Los recortes en educación afectaron a los jóvenes de distintas maneras. Por una parte, salvo unas pocas CCAA, en septiembre de 2012 entraron en vigor nuevas tasas de matriculación que encarecieron significativamente los estudios de grado y de máster. El precio de los créditos de estos últimos, aproximadamente un 30% superior al de los créditos de grado, ha supuesto una traba de primer orden para el acceso de colectivos sin gran poder adquisitivo, pero sin derecho a beca. En ese sentido, el gasto total en becas y ayudas disminuyó en los cursos 2012-2013 y 2013-2014, en un momento en que muchas familias vivían dificultades económicas crecientes para mantener a sus hijos en la universidad. Eso se

¹ La Renta Básica de Emancipación era una ayuda de 210 euros durante cuatro meses, que podía ir acompañada de otras facilidades económicas para que jóvenes entre 22 y 30 años pudieran acceder al mercado de alquiler. La RBE fue derogada en diciembre de 2011, pero manteniéndola para aquellas personas que tuviesen el derecho reconocido con anterioridad. En julio de 2012 se redujo la cuantía de 210 a 147 euros, denegando ayudas a todas las personas para las que la solicitud pendiente no hubiera sido resuelta en esa fecha. Entre 2008 y 2011, la habían pedido 490.991, de las que el 76% fueron aprobadas (Gentile 2016).

² El cheque-bebé fue una prestación económica no contributiva de 2.500 € percibida por cada hijo nacido o adoptado desde el 1 de julio de 2007 y el 31 de diciembre de 2010 para afrontar las dificultades económicas que la llegada de un nuevo hijo implica. La medida benefició a cerca de 500.000 familias anualmente (González 2013).

³ El ejemplo más notorio es una prestación universal de 650 euros que, entre 2003 y 2011, obtenían las familias catalanas por cada uno de sus hijos menores de tres años.

reflejó fundamentalmente en el descenso de la cuantía de las becas. Se ha estimado que en el curso 2013-2014 los becarios de las enseñanzas universitarias percibieron, de media, 1.869 euros, un 27% menos que dos años antes (El Diario 2015).

Por otra parte, ante una caída drástica de la financiación pública, las Universidades congelaron el reclutamiento de profesores a tiempo completo y ralentizaron la estabilización laboral de su profesorado, intensificando la precarización de los segmentos más jóvenes de sus plantillas. En la enseñanza primaria y secundaria se paralizaron los concursos y se recortaron las contrataciones de interinos.

Más allá del sector educativo, los ajustes en la contratación pública afectaron especialmente a los trabajadores más jóvenes, que vieron selladas las vías convencionales de entrada en el sector público. Aunque los niveles de empleo público no bajaron hasta 2012, los ajustes que se produjeron en los siguientes dos años fueron muy importantes. La estrategia de rebajar significativamente las tasas de reposición de efectivos de nuevo ingreso, dejando vacantes puestos de funcionarios después de que sus titulares se jubilaran, afectaron especialmente a los trabajadores más jóvenes (Martínez Matute / Pérez 2017). Según denunciaba a principios de 2018 el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios, como resultado de esta política, el número de jóvenes funcionarios menores de 30 años había caído un 80% (El Economista 2017).

Los jóvenes fueron también uno de los colectivos más perjudicados por el Real Decreto 16/2012, que daba carpetazo a más de veinticinco años de progresos en la construcción de un Sistema Nacional de Salud (SNS) de carácter universal (basado en la residencia), gratuito en el momento del uso y financiado a través de impuestos (desde principios de los 2000, sin relación financiera con el sistema de Seguridad Social). A partir de diciembre de 2012, en el nuevo modelo se retiraban tarjetas sanitarias a personas que no cotizaban y que salían del país más de 90 días, lo que incluía gran número de jóvenes que salieron de España en búsqueda de oportunidades laborales.

Pero sería injusto ceñirse exclusivamente a los recortes, sin prestar atención a las necesidades y situaciones de privación crecientes que no se atendieron. Como hemos visto, durante la crisis, la caída de la ocupación de los jóvenes superó con creces la de cualquier otro grupo de edad, pro-

vocada principalmente por la masiva pérdida de empleo de los trabajadores con empleos más precarios. En este contexto de necesidades crecientes, los programas de protección pública resultaron cada vez más ineficaces. Así, las tasas de cobertura por desempleo para los trabajadores jóvenes en paro se deslizan a lo largo de la crisis por una pronunciada cuesta abajo. Según datos de la Fundación 1º de Mayo, en el año 2014, solo el 10% de los jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo disfrutaba de alguna prestación.

La mayoría de los jóvenes afrontó muchas restricciones para acceder a prestaciones de último recurso, como el Plan Prepara, ideado por el Gobierno de Zapatero en 2011 como subsidio destinado a los parados de larga duración que hubieran agotado su prestación por desempleo. Hasta 2013, para recibir la ayuda de 400 euros, el solicitante debía haber agotado todas las prestaciones y demostrar que no tenía otras ayudas que superasen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). A partir de ese momento, además de este requisito se iban a tener en cuenta los ingresos familiares, de forma que todas las ganancias divididas entre las personas que habitan en la misma casa no superasen el límite de 481 euros correspondiente al 75% del SMI. Con ello, en la práctica, se dejaba fuera a la inmensa mayoría de jóvenes desempleados que no se habían emancipado o habían retornado al hogar familiar con la crisis⁴.

Quienes entraron en el mercado de trabajo o cambiaron de empleo (mayoritariamente jóvenes) vieron cómo sus salarios se desplomaban frente a aquellos trabajadores que mantenían sus empleos. La crisis también provocó un empobrecimiento general de los jóvenes, de magnitud superior al que tiene lugar en otros grupos de edad (Marí-Klose / Cerviño / Julià-Cano 2018). En consonancia con estas tendencias, las tasas de emancipación empiezan a caer a partir de 2011. Un número creciente de jóvenes experimenta dificultades para acceder a la vivienda sin que desde las administraciones públicas se arbitre ningún tipo de medidas para dar respuesta a esa problemática. La inversión en parque público de vivienda se mantuvo en cifras extraordinariamente bajas, que sitúan a España en

⁴ En ese mismo sentido, muchas CCAA excluían como potenciales titulares de las rentas mínimas autonómicas a personas menores de 25 años.

un lugar insólito en Europa. El alquiler social es una opción disponible para una proporción muy pequeña de jóvenes.

La buena noticia debía ser la Garantía Juvenil, concebida como una ambiciosa iniciativa europea cuyo objetivo era facilitar a los jóvenes el acceso al mundo del trabajo a través de diversos programas y medidas en los campos del emprendimiento, el autoempleo y la empleabilidad. Las primeras evaluaciones de la implementación del programa sugieren que el programa ha adolecido de graves problemas de ejecución, lo que se refleja en una brecha considerable entre los destinatarios previstos y los beneficiarios finales (Moreno 2017; Igal / Pac / Gómez 2018). Los datos de opinión pública sugieren igualmente que, a pesar de las altas cifras de desempleo en España, fue una medida que no llegó a conocerse adecuadamente. Según datos del *European Youth Eurobarometer* de 2016, solo el 24% de los jóvenes españoles de 16 a 30 años declaraba haber oído hablar de la Garantía Juvenil.

Lealtad, salida, voz

En *Salida, voz, lealtad*, un clásico de la Ciencia Política y la Economía, Albert Hirschmann defendía que los partícipes en una empresa colectiva, sea un negocio, un país o cualquier otra forma de organización, muestran esencialmente tres tipos de respuestas cuando perciben que se deteriora el valor de los beneficios que se deriva de su membresía en el grupo. Pueden mostrar lealtad (aceptando resignadamente el deterioro o procurando adaptarse a la nueva situación), salir (desvinculándose del grupo), alzar la voz y protestar (expresando su queja, su descontento y propuestas de mejora). Por ejemplo, los empleados de una empresa que ofrece empleos poco atractivos pueden aceptar que es, a pesar de todo, el mejor empleo que pueden conseguir, pueden expresar su descontento por sus condiciones de trabajo o renunciar a su puesto de trabajo. De manera parecida, los consumidores descontentos con un bien o servicio tienen la oportunidad de permanecer callados, trasladar sus quejas al responsable o dejar de consumir ese bien o servicio.

Son también las respuestas que pudieron dar los jóvenes en un contexto de crisis. Muchos jóvenes afectados por la falta de oportunidades, en

un marco que podríamos calificar de *lealtad*, se embarcaron en procesos de reinención personal. Algunos –los que se lo pudieron permitir– optaron por una estrategia “individualista”, redoblando la dedicación a sus estudios, con objeto de reforzar su capacidad de competir en el mercado de trabajo, ayudados por sus familias, dispuestas a arrimar el hombro en lo que los sociólogos llamamos “solidaridad de promoción”. Las tasas agregadas de abandono educativo temprano se redujeron notablemente, una caída que no se produce en el quintil de ingresos más bajo (Save the Children 2015).

En los tramos de ingreso más bajos aumentó el número de jóvenes que ni estudiaba ni trabajaba (ninis). Entre 2008 y 2013, la proporción de ninis en España pasó de 19,05% a 32.35% (datos de la OCDE Data online). Sorprendentemente, no encontramos un aumento paralelo de expresiones de anomia, como se observó en crisis anteriores (como la epidemia de toxicomanías que tantas vidas se cobrara en la década de los ochenta). Está por saber qué muros de contención social evitaron un mayor deterioro de los climas sociales en los territorios de intensa exclusión social.

En ese mismo marco de actuación individualista, otros decidieron emigrar, dejando atrás a sus seres queridos, espoleados por cantidades ingentes de frustración acumulada. La emigración de jóvenes (y no tan jóvenes) se convirtió en motivo de controversia política. Mientras desde la oposición de izquierdas y los nuevos movimientos sociales empezó a hablarse de “exilio económico” para referirse a la emigración de ciudadanos forzados a salir de España en busca de oportunidades, el Gobierno restaba importancia a los flujos, calificándolos de “movilidad exterior”. Incluso los científicos sociales fueron incapaces de ponerse de acuerdo sobre el número de españoles que salieron del país, y sobre cuántos de ellos eran jóvenes. Muchos coincidieron en que las estadísticas oficiales, que indicaban que entre 2008 y 2012 habían salido 225.000 españoles al exterior, infrarrepresentaban masivamente el número real de efectivos, como consecuencia de que la mayoría de ellos no se registraba en el consulado como emigrante residente en el extranjero por dejadez, para no perder el derecho a prestaciones o conservar su derecho a voto (Romero / Hidalgo 2014). Esa reticencia a inscribirse refleja, quizás, también entre muchos de estos emigrantes cierta convicción de que la salida al exterior iba a ser una opción pasajera, experimental, de emigración “a prueba”

mientras las cosas siguieran convulsas en España y subsistieran los problemas de inserción laboral. Esa, sin embargo, no parece haber sido la motivación de muchos otros residentes extranjeros en España que abandonaron el país en un contexto de falta de oportunidades laborales con la intención de asentarse en otros lugares que les ofrecieran el trabajo que escaseaba en España.

Una tercera respuesta –la que más atención suscitó– fue la de los jóvenes que alzaron la voz. Muchos jóvenes optaron por una “vía colectiva” de protesta, protagonizaron algunas de las principales movilizaciones que se recuerdan en la democracia a partir del 15-M, y convulsionaron el sistema político. En un interesante estudio hecho sobre el terreno, sobre una muestra de participantes en el movimiento en Salamanca, Calvo, Gómez Pastrana y Mena (2011) acreditan la sobrerrepresentación masiva de jóvenes de entre 19 y 30 años en las plazas y asambleas del 15-M. Pero igualmente detectan que sus objetivos tienen un carácter fuertemente *sociotrópico*: los jóvenes que se congregan y debaten en comisiones declaran que les preocupa sobre todo cuestiones políticas de carácter formal (la reforma electoral) y general (la corrupción), el poder de los mercados financieros y la manipulación de los medios de comunicación. Se sienten distanciados de las estructuras de representación (“no nos representan”) y plantean enmiendas a un sistema que no encausa sus demandas, ya sea de carácter parcial (para mejorar la canalización de sus agravios) o a la totalidad (abogando por un sistema alternativo en el que no exista una desconexión radical entre élites y una masa amorfa de ciudadanos desoídos y desposeídos). En el magma de reivindicaciones que se van planteando aparecen temas que conciernen especialmente a los jóvenes (como el acceso al empleo, la calidad de la educación o la necesidad de emigrar), pero no son ni mucho menos los que más relevancia adquieren.

La convulsión social provocada por la crisis tuvo importantes repercusiones políticas. La crisis incrementó los sentimientos de desafección hacia la política y las instituciones. La confianza en el Gobierno, los partidos y el parlamento descendió acusadamente a partir de 2008, y también lo hizo la satisfacción con la democracia (Alonso / Rovira Kaltwasser 2014). El desencanto juvenil se extendió. Según datos del *European Youth Eurobarometer* de 2016, el 79% de los jóvenes de 16 a 30 años declaraba que se había sentido excluido de la vida económica y social durante la

crisis. Pero el interés por la política entre la juventud aumentó significativamente. Según datos de la Encuesta Social Europea 2014, a la salida de la crisis los jóvenes muestran un interés político más elevado que el conjunto de la población, algo que en Europa solo ocurre también en Portugal. También creció sustantivamente entre ellos el consumo de información política y la confianza en sus competencias políticas (Benedicto et al. 2017).

Como señala la socióloga Belén Barreiro (2017: 108-110), los jóvenes se convierten en *antagonistas*, que buscan transitar en sentido contrario al resto de la sociedad. Los jóvenes quiebran el sistema bipartidista, votando mayoritariamente por los dos partidos emergentes. Así ocurre ya en la primera convocatoria a la que se presenta Podemos, las elecciones europeas de 2014. Según datos de la Encuesta Postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Podemos obtiene el 25% de los votos de los jóvenes de 18 a 24 años, frente al 11,6% del PSOE y el 8% del PP. También cosecha el 19,4% de los jóvenes de 25 a 34 años, frente al 14,3% del PP y el 11,1% del PSOE.

A partir de ese momento, el ascenso de Podemos en la preferencia de los más jóvenes es fulgurante. Podemos se convierte en el partido que encabeza los sondeos del CIS en las franjas jóvenes. Así, en el barómetro de enero de 2015, Podemos obtiene el 32,7% de los apoyos en el indicador de *Voto probable* (Voto+Simpatía) entre los menores de 25 años, y un 29,8% entre las personas de 25 a 34 años. Los partidos que habían hegemonizado el panorama electoral desde principios de los ochenta obtenían resultados muy modestos en estas franjas de edad, mientras superaban claramente a Podemos en edades más avanzadas. En las elecciones de diciembre de 2015, Podemos obtiene el 29,2% de los votos en la franja de 18 a 24 años y el 31,4% entre los que tenían de 25 a 34 años (“recuerdo de voto” en la Encuesta Postelectoral de 2015). Junto a Podemos, un nuevo partido emergente de centro-derecha, Ciudadanos, también obtiene entre los jóvenes resultados mejores que el PP y el PSOE: 17,6% y 16%, respectivamente.

Las elecciones de 2015 confirman el alejamiento de los jóvenes de los partidos que llevaban tres décadas alternándose en el gobierno. Más del 50% de los jóvenes menores de 35 años que votó optó por fuerzas emergentes, mientras el PP y el PSOE solo obtenían conjuntamente el respaldo

de una cuarta parte del electorado de esas edades. Estos datos contrastaban diametralmente con el apoyo que recibían las distintas fuerzas políticas entre los mayores de 44 años, y muy especialmente de 64 años. En este último grupo, el PP obtenía el 37,5%, el PSOE el 22,3%, Podemos un exiguo 6,5% y Ciudadanos un 4,9% (Encuesta Postelectoral del CIS, 2015). La crisis había abierto una brecha inédita en el comportamiento electoral de los españoles. Dicha brecha erosionó fundamentalmente la posición electoral del PSOE, que tradicionalmente obtenía un respaldo mayoritario en las franjas de edad más jóvenes, que le permitía apuntalar grandes mayorías electorales. Privado de este apoyo, su base electoral resultaba claramente insuficiente para convertirse en el partido más votado, lo que colocaba a su rival conservador en situación de ventaja para reeditar gobierno con el acuerdo con Ciudadanos (cosa que sucedió a partir de octubre de 2016).

¿De vuelta a la normalidad?

La crisis dejó una profunda huella en la sociedad española. Esa huella es fácil de rastrear en la vida de millones de personas que experimentaron su azote en forma de desocupación, un proceso de pérdida de estatus social, empobrecimiento, emigración, desahucios, etc. Pero más allá de esa experiencia directa, la crisis interpela también de manera profunda a la subjetividad de muchas personas, conformada por normas, valores, expectativas y emociones. En España estas subjetividades estaban íntimamente vinculadas a un pacto intergeneracional que imponía sacrificios, pero también proponía recompensas. Un pacto que la crisis quiebra. La crisis, en ese sentido, violenta de forma rotunda un relato biográfico en el que la mayoría de los jóvenes españoles habían encontrado en las tres décadas anteriores razones para esperar pacientemente su momento de hacerse plenamente adultos y hacer efectivos los derechos y privilegios que un sistema familiarista como el español reserva a grupos de edad más avanzada.

La ruptura del pacto intergeneracional no es solo el resultado de una crisis que trastoca el funcionamiento de los mercados y reduce el volumen del producto a repartir. Es, en buena medida, una derivada de decisiones política tomadas en el marco de un programa de austeridad o de

una falta de respuesta a nuevas necesidades sociales emergentes en el mismo marco. Esas acciones e inacciones públicas son imputables a gobiernos de distinto signo, aunque evidentemente no con el mismo rigor e intensidad. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prometió una “salida social a la crisis”, pero sucumbió a las demandas externas para que ajustase el gasto público. Suya es la supresión de las ayudas por nacimiento introducidas en 2008. Al Gobierno popular que se inicia a finales de 2011 son imputables gran parte de las medidas detalladas en páginas anteriores y, en general, la pasividad ante el incremento de necesidades insatisfechas y la expresión de demandas. Las CCAA, ahogadas por la contracción de la financiación autonómica, contribuyeron a convertir las políticas cuyos principales beneficiarios podía ser la población joven en uno de los “eslabones” más débiles. Entre 2012 y 2014 la austeridad se cobrará entre los jóvenes sus principales víctimas, alimentando el descontento y la frustración de expectativas entre segmentos muy amplios del colectivo.

En este nuevo mapa social y político que aparece en los primeros años de la crisis, los partidos tradicionales se movieron con lentitud, mostrando inicialmente una palmaria falta de sintonía con los agravios expresados por la mayoría de los jóvenes. Como hemos tenido ocasión de analizar en otro trabajo que rastrea los cambios en los programas electorales de esos partidos (Marí-Klose 2018), en todo el período el diagnóstico del Partido Popular atribuye la situación a la mala gestión del Gobierno socialista. Lejos de reconocer en la crisis un factor de distorsión que sacude las bases del sistema, los conservadores confían en recetas atemporales: educación y empleo. En el programa de 2011, la educación es vista como la principal palanca para llegar a cambiar las cosas: “un camino de oportunidades”. Los jóvenes son víctimas de “un sistema educativo de escasa calidad, que no promueve la excelencia y que no prepara a los alumnos para competir en la economía del conocimiento”. A ojos de los populares, los problemas de emancipación residencial están disociados completamente de las políticas de bienestar. Los problemas de vivienda derivan de un mercado de alquiler disfuncional y de una fiscalidad inadecuada. Tampoco hay referencia alguna a los problemas de desprotección social de los jóvenes por falta de acceso a prestaciones de desempleo.

Por su parte, en su programa de 2016, el tono general es ya positivo y optimista. Las dificultades laborales que afrontan muchos jóvenes es, en

el retrato que realiza el programa del Partido Popular, mayormente cosa del pasado. Los protagonistas de su programa son jóvenes “emprendedores”, “preparados”, “equipados con herramientas”, llamados a construir activamente el futuro de la sociedad española. El reto del Gobierno debe facilitar las condiciones para que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades y aprovechar su talento y capacidades. En la única ocasión en que se menciona tangencialmente la emigración de jóvenes es en una propuesta para crear “un programa integral de apoyo a emprendedores del mundo digital y acceso a financiación, con el objetivo de retener en nuestro país el talento de los jóvenes”. Tampoco se alude a la situación de los jóvenes en el marco del sistema de protección social.

Frente a ellos, el PSOE sí opta por acometer un importante giro programático en materia de juventud. Mientras en las elecciones de 2011, celebradas pocos meses después del 15-M y con 1,5 millones de jóvenes en situación de desempleo, el PSOE apenas problematiza en su programa la vulnerabilidad de los jóvenes en el sistema de protección, la salida al exterior de muchos jóvenes o su deseo de participación, a partir de 2015 estos temas cobran creciente protagonismo en los programas. En el programa de 2015 se reconoce explícitamente la situación de desventaja de los jóvenes en relación a las personas mayores, situación que se califica como quiebra generacional. La “fractura-intergeneracional” aparece junto a otras cuatro grandes fracturas (la social, la de género, la institucional y la territorial) como uno de los ejes de actuación para construir un nuevo contrato social con la ciudadanía.

El abanico de temas que afectan a los jóvenes y que exigen acción política se ha ampliado. Los jóvenes son reconocidos como las “víctimas olvidadas” de la crisis y los mayores afectados por la creciente desigualdad, lo que compromete la igualdad de oportunidades en la vida y la justicia intergeneracional. Por una parte, son los grandes perjudicados por la destrucción de empleo y la reforma laboral. Pero el diagnóstico es mucho más complejo que cinco años antes: “La falta de oportunidades laborales en las etapas de transición a la vida adulta produce efectos ‘cicatriz’ que repercuten negativamente en las trayectorias laborales futuras y, en general, en las oportunidades vitales”. La falta de perspectivas los empuja a la emigración: “Más de 400.000 jóvenes han tenido que abandonar su país porque aquí no hay ni futuro ni esperanza”.

Sin embargo, las soluciones ya no pasan solo por ayudar a los jóvenes a encontrar empleo, reforzando planes de integración laboral y programas de formación. Se reconoce la necesidad de ofrecer a los jóvenes nuevos dispositivos de protección, mejorando la cotización de los trabajadores más jóvenes (a través de la posibilidad de ‘adquirir’ periodos de cotización mediante la suscripción de un Convenio Especial e incrementar las bases mensuales de cotización de los contratos de aprendizaje y de formación). En consonancia con la idea de que los jóvenes experimentan una situación de desventaja estructural en la sociedad, se propone abrir el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio a los jóvenes mayores de 16 años.

En abril de 2019, el PSOE vuelve a ganar las elecciones. Según el sondeo preelectoral del CIS, en el indicador de voto probable, el PSOE habría recuperado, con un 18,7% entre los jóvenes de 18 a 24 años y un 18,6% entre los de 25 a 34, un apoyo importante en estas franjas de edad, encarándose a la primera posición en sus preferencias. Pero se trata de cifras que se sitúan claramente por debajo del voto probable medio del PSOE en el momento de realizar el sondeo (marzo de 2019), el 24,8%. Unidas Podemos, con su socio catalán de En Comú, obtiene el 13,2% (18-24) y el 13,9% (25-34), y Ciudadanos el 12,4% y el 13,3%. El PP queda claramente rezagado, con un 7,9% y un 7,5%. España sale de la crisis con las preferencias políticas de los jóvenes claramente fragmentadas, una fragmentación que no es ajena a la diversificación de experiencias vividas en los escenarios de crisis y poscrisis. A pesar de la evolución de sus propuestas y la renovación de liderazgos, el PSOE no ha conseguido hacerse perdonar completamente su gestión de la crisis y permanece alejado de una fracción del electorado más joven que sigue apostando por el partido que en su día encarnó el espíritu de *protesta* del 15-M. Mientras tanto, la preferencia por la *lealtad* adquiere nuevos bríos con el auge de Ciudadanos, que arranca sus mayores apoyos entre los jóvenes de origen social más acomodado.

Salimos de la crisis con un nuevo sistema de partidos, nuevos liderazgos, nuevos baremos para juzgar la política. Los jóvenes contribuyeron decisivamente a traerlos. El valor de “lo nuevo”, de las fuerzas políticas emergentes, de la renovación de los cuadros políticos, del proceso constituyente, llegó a cotizar muy alto. Es poco dudoso que la sacudida econó-

mica y social que produjo la crisis hizo temblar cimientos muy profundos de la sociedad, como los que fundamentaban la distribución de ventajas y desventajas sobre un pacto intergeneracional implícito. Persisten agravios y frustraciones que empujan a muchos jóvenes a manifestar su malestar mediante la *protesta* e incluso la *salida*. Sin embargo, no es menos cierto que buena parte de las estructuras e instituciones que auspiciaban ese contrato social entre generaciones siguen intactas, encaminando a la mayoría de los jóvenes a volver a confiar, aunque de manera reticente, en que su momento está por llegar.

Bibliografía

- Alonso, Sonia / Rovira Kaltwasser, Cristobal (2014). “Spain: No Country for the Populist Radical Right”. En: *South European Society and Politics*, 20, 1, 21-45, <http://dx.doi.org/10.1080/13608746.2014.985448>.
- Barreiro, Belén (2017). *La sociedad que seremos*. Madrid: Planeta.
- Benedicto, Jorge et al. (2017). *Informe Juventud en España 2016*. Madrid: Injuve.
- Calvo, Kerman / Gómez Pastrana, Teresa / Mena, Luis (2011). “Movimiento 15M: ¿quiénes son y qué reivindican?”. En: *ZoomPolítico*, 4, 4-17.
- El Diario (2015). “Las becas universitarias han caído de media un 27% con el gobierno de Rajoy”. En: *eldiario.es*, 18 de agosto. Disponible en: https://www.eldiario.es/sociedad/Radiografia-becas-ministerio-despues-Rajoy_o_418558787.html [consultado 30.06.2019].
- El Economista (2017). “No es país para jóvenes: el número de funcionarios del Estado menores de 30 años cae un 80%”. En: *elEconomista.es*, 14 de marzo. Disponible en: <https://www.eleconomista.es/economia/noticias/8220461/03/17/No-es-pais-para-jovenes-cae-el-80-el-numero-de-funcionarios-del-Estado-menores-de-30.html> [consultado 30.06.2019].
- Fernández Kranz, Daniel (2017). “Los salarios en la recuperación económica”. En: *Cuadernos de Información Económica*, 260, 1-11.

- Gentile, Alessandro (2015). "Rental Subsidy and the Emancipation of Young Adults in Spain". En: *International Journal of Housing Policy*, 16, 2, 243-254. DOI: <https://doi.org/10.1080/14616718.2015.1119359>.
- González, Libertad (2013), "The Effect of a Universal Child Benefit on Conceptions, Abortions, and Early Maternal Labor Supply", *American Economic Journal*, 5, 3, 160-188.
- Igal Melendo, Alberto / Pac Salas, David / Gómez Quintero, Juan David (2018). "La Garantía Juvenil en Aragón: claroscuros de las políticas públicas para la inserción laboral de los jóvenes". *Working Paper del Observatorio de la Desigualdad de Aragón*. Disponible en: https://transparencia.aragon.es/sites/default/files/documents/2_garantia_juvenil_emprendimiento.pdf [consultado 30.06.2019].
- Iglesias de Ussel, Julio / Marí-Klose, Pau (2016). "Familia y problemas sociales". En: Trinidad Requena, Antonio / Sánchez Martínez, Mariano, eds. *Marcos de análisis de los problemas sociales*. Madrid: Catarata, 208-228.
- Hirschman, Albert (1977). *Salida, voz, lealtad*. México: Fondo de Cultura Económica.
- López Navas, Cristina, ed. (2019). *Índices de Desarrollo Juvenil. Informe I: Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado (2009-2017). España en Europa*. Madrid: Catarata.
- Marí-Klose, Pau (2018). "Jóvenes en la agenda política en los tiempos convulsos de la Gran Recesión". En: *Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado (2009-2017)*. Madrid: Centro Reina Sofía, 151-166.
- Marí-Klose, Pau / Cerviño, Emma / Albert Julià (2018). "Edad, pobreza y vulnerabilidad económica". En: Ayala, Luis / Ruiz Huertas, Jesús, eds. *Tercer Informe sobre la Desigualdad en España*. Madrid: Fundación Alternativas, 85-122.
- Martínez Matute, Marta / Pérez, Javier J. (2017). "La evolución del empleo de las Administraciones Públicas en la última década". En: *Boletín Económico* 4, Banco de España.
- Moreno, Almudena (2017). "El reto de la Garantía Juvenil ¿solución a un problema estructural?". En: *Observatorio Social de "la Caixa"*. Disponible en: <https://observatoriosociallacaixa.org/-/el-reto-de-la-garantia-juvenil> [consultado 30.06.2019].

- Moreno, Luis / Marí-Klose, Pau (2013). “Bienestar Mediterráneo: trayectorias y retos de un régimen en transición”. En: Del Pino, Eloísa / Rubio, María Josefa, eds. *Los Estados de Bienestar en la Encrucijada*. Madrid: Tecnos, 126-146.
- Observatorio Social de “la Caixa” (2019). “Necesidades Sociales en España. Mercado de Trabajo”. En: *Observatorio Social de “la Caixa”*. Disponible en: <https://observatoriosociallacaixa.org/es/bienestar-economico-material> [consultado 30.06.2019].
- Polavieja, Javier G. (2005). “The Incidence of Temporary Employment in Advanced Economies: Why is Spain Different?”. En: *European Sociological Review*, 22, 1, 61-78.
- Romero, Juan Manuel / Hidalgo, Antonio (2014). “El subregistro consular: magnitudes y efectos en las estadísticas de emigración española”. En: OBETS, *Revista de Ciencias Sociales*, 9, 2, 377-407.
- Save the Children, ed. (2015). *Desheredados. Desigualdad infantil en España*. Disponible en: <https://www.savethechildren.es/publicaciones/desheredados> [consultado 30.06.2019].

Sobre el autor: Pau Marí-Klose es Profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza (en excedencia). Doctor en Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en la University of Chicago y en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Ha sido Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España. Autor o co-autor de catorce libros y más de una cincuentena de artículos académicos y capítulos en obras colectivas sobre sociología de la familia, pobreza infantil, desigualdad y política social. Entre sus últimos libros destaca *La infancia que queremos. Una agenda política para erradicar la pobreza infantil* (Catarata, 2019) y *The Mediterranean Welfare Regime and the Economic Crisis* (Routledge, 2014).